

REPÚBLICA DE COLOMBIA



SALA CUARTA DE DECISION LABORAL

PROCESO	ORDINARIO
DEMANDANTE	Arcángel de Jesús Corrales Tangarife
DEMANDADOS	AFP Protección S.A. y COLPENSIONES
PROCEDENCIA	Juzgado 7º Laboral del Circuito de Medellín
RADICADO	05001 3105 007 2022 00017 01
INSTANCIA	SEGUNDA
PROVIDENCIA	SENTENCIA Nro. 48 de 2023
TEMAS Y SUBTEMAS	Ineficacia de traslado
DECISIÓN	Revoca, adiciona y confirma

Hoy, **veinticuatro (24) de marzo de dos mil veintitrés (2023)**, el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Medellín, Sala Cuarta de Decisión Laboral integrada por las magistradas: María Eugenia Gómez Velásquez, Claudia Angélica Martínez Castillo y como ponente, Luz Amparo Gómez Aristizábal, procede a emitir pronunciamiento frente al recurso de apelación formulado por el apoderado de **Colpensiones**, y grado jurisdiccional de consulta para la misma entidad, ordenado en sentencia proferida por el Juzgado Séptimo Laboral del Circuito dentro del proceso ordinario promovido por **Arcángel de Jesús Corrales Tangarife**, en el que también se demandó a la **AFP Protección S.A.** Radicado único nacional 05001 3105 **007 2022 00017** 01.

Auto: en los términos de la documentación allegada vía correo electrónico, se procede a reconocerle personería jurídica al Doctor

Diego Alberto Medina Díaz y a la Doctora Valentina Gómez Agudelo, para que continúen con la representación del demandante y de Colpensiones, respectivamente.

La Magistrada ponente, en acatamiento de lo previsto en el artículo 13 de la Ley 2213 del año en curso, procede a emitir sentencia, según proyecto estudiado, discutido y aprobado mediante acta Nro. **006** que se plasma a continuación:

Antecedentes

De acuerdo a lo decidido en primera instancia y lo que es objeto de pronunciamiento por parte de la Sala, se tiene que el demandante pretende se declare la nulidad y/o ineficacia del traslado que realizó del régimen de prima media con prestación definida al de ahorro individual con solidaridad, al carecer de validez por existir vicios del consentimiento y afectar sus derechos y garantías mínimos; en consecuencia, ruega se tenga como válida, vigente y sin solución de continuidad la afiliación al régimen de prima media con prestación definida, ordenándosele a Protección S.A., retornar a Colpensiones, todos y cada uno de los aportes efectuados, incluidos los rendimientos financieros y cuotas de administración. Pide también la condena en costas.

En sustento de ello afirma que, nació el 31 de marzo de 1966, vinculándose al régimen de prima media con prestación definida el 26 de marzo de 1987, entidad a la cual efectuó aportes hasta la fecha en que migró al régimen de ahorro individual con solidaridad, 29 de junio de 1994. Que al momento del traslado, la AFP no le suministro información adicional a la edad y el saldo que requería para pensionarse, como sería el IBC con el que debía cotizar a fin de obtener

una pensión anticipada o completar el capital para poder acceder a la pensión de vejez, así como tampoco se le dijo sobre la edad en la que se redimía el bono pensional, entre otras; que cuenta con 1.741 semanas de cotización; que solicitó el 19 de julio de 2021, ante Protección, la anulación de la afiliación e información sobre la asesoría brindada, respondiéndole que no contaban con soportes al haberse suministrado de manera verbal y que no era procedente la anulación, no obstante, se le remitió proyección de la pensión, indicándole que a los 62 años accedería a una garantía mínima. Finalmente, esgrime que le requirió a Colpensiones la anulación del traslado al régimen de ahorro individual con solidaridad, respondiéndole que no era dable acceder a tal requerimiento.

En auto del **14 de febrero de 2022, se admitió** y ordenó dar trámite a la acción. Debidamente enteradas de la actuación las demandadas allegaron escritos de contestación así:

Colpensiones, de los hechos tiene como ciertos la fecha de nacimiento del actor, la afiliación al régimen de prima media con prestación definida, el traslado efectuado al régimen de ahorro individual, la solicitud elevada ante Protección y a esa entidad, así como las respuestas negativas brindadas por ambos fondos. Los demás supuestos no le constan. **Presentó oposición** a la prosperidad de las pretensiones y formuló excepciones de mérito tendientes a enervarlas, las cuales denominó: inexistencia de la obligación demandada y falta de derecho para pedir, inoponibilidad de la responsabilidad de la AFP ante Colpensiones, en el caso de ineficacia, buena fe, prescripción, imposibilidad de condena en costas y la innominada o genérica.

Protección S.A., admite la data en que nació el actor, la suscripción del formulario de afiliación, el número de semanas cotizadas, la solicitud

elevada y la respuesta dada a la misma, junto con la proyección pensional; con relación a los restantes supuestos de hecho manifiesta que no son ciertos, no obstante, advierte que la asesoría *"que se les brinda a los potenciales afiliados hace énfasis en la característica principal de la cual depende la pensión de vejez en el RAIS la cual es el CAPITAL ACUMULADO EN LA CUENTA DE AHORRO INDIVIDUAL, el cual analizado de acuerdo a otros factores como la edad, los beneficiarios, el factor actuarial, el bono pensional, los rendimientos y la reglamentación del Ministerio de Hacienda constituye el requisito primordial para alcanzar la pensión en este régimen, por lo que puede decirse que así como en el RPM si no se cumple con un numero de semanas de cotización y una edad determinada no se alcanza el derecho a la pensión, en el RAIS se requiere un capital para alcanzar la misma."* Informándosele además que: *"en el evento de no cumplir con el capital requerido para acceder a una pensión de vejez en el RAIS, podría acudir al mecanismo de Garantía de Pensión Mínima de Vejez, siempre y cuando se cumpla con los requisitos de edad y semanas exigidos en el artículo 65 de la ley 100 de 1993, esto es, 57 años mujeres o 62 hombres, 1150 semanas de cotización."* **Resistió las pretensiones**, expuso los fundamentos de derecho y razones de defensa, y formuló las excepciones de: inexistencia de la obligación y falta de causa para pedir, buena fe, prescripción, aprovechamiento indebido de los recursos públicos del sistema general de pensiones, inexistencia de la obligación de devolver comisiones de administración y seguros previsionales por falta de causa y al afectar derechos de terceros de buena fe y la innominada.

La primera instancia terminó con **sentencia** proferida por el Juzgado Séptimo Laboral del Circuito, en la que declaró **ineficaz** el traslado de régimen pensional efectuado por el actor a Protección S.A.; teniéndolo válidamente afiliado a Colpensiones, sin solución de continuidad, en consecuencia, condenó a la AFP Protección S.A. *"a trasladar ... con destino a COLPENSIONES, los montos existentes en la cuenta de ahorro individual del demandante y los aportes al FGPM con sus respectivos rendimientos financieros, se exceptúan de dicha devolución los dineros destinados a pago de cuotas de administración y prima de seguros previsionales para los riegos de invalidez y*

muerte /.../ Estos dineros deberán ser trasladados dentro de los 30 días siguientes a la ejecutoria de esta providencia..". Condenó a COLPENSIONES a validar la afiliación del demandante y a recibir los dineros que debe entregarle la AFP, además de tener en cuenta el tiempo cotizado en el RAIS como semanas que deberán reflejarse en su historia laboral. Declaró no probadas las excepciones propuestas por las demandadas, salvo la de buena fe e imposibilidad de condena en costas en favor de Colpensiones, y la de devolver las cuotas de administración y primas de seguros previsionales invocada por Protección S.A., sociedad a la que impuso condena en costas, fijando el monto de las agencias en derecho. Dispuso el grado jurisdiccional de consulta para Colpensiones.

Argumentó la falladora que el traslado de régimen pensional se encuentra regulado en el artículo 13 de la Ley 100 de 1993, partiendo el mismo de la cabal y correcta asesoría que lleve a un asegurado a tomar una decisión responsable e informada sobre dicho acto, indicando la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Laboral, que la omisión de las administradoras de pensiones en brindar una debida asesoría al momento del traslado, lo convierte en ineficaz, posición que ha constituido una línea jurisprudencial pacífica y reiterada desde el 2008, estableciéndose en dichas sentencias que las administradoras desde su creación, es decir, desde 1994 que empezó a regir el sistema pensional de la Ley 100, tenían el deber de brindar información a los afiliados o usuarios del sistema pensional a fin de que estos pudieran adoptar una decisión consciente y realmente libre sobre su futuro pensional, existiendo hasta el 2009 un deber de información, con posterioridad y hasta el 2015 el deber de asesoría y buen consejo, y en la actualidad la doble asesoría; sin que la simple constancia del consentimiento vertido en el formulario de afiliación sea suficiente para dar por demostrado tal deber, pues, ello a lo sumo acredita un consentimiento, pero no informado, y que la carga de la prueba de

demostrar que el afiliado recibió una información debida, veraz y suficiente cuando se vinculó, le corresponderá a la administradora de fondos de pensiones.

Estableciendo que para el caso, se presentó un incumplimiento al deber de información, pues, no se advierte que se le hubiese entregado la necesaria, completa y veraz al momento de la vinculación inicial, ni con posterioridad, razón por la cual procedente resultaba la declaratoria de ineficacia del tránsito entre regímenes, debiendo Protección S.A. trasladar los recursos de la cuenta de ahorro individual, aportes y rendimientos, incluyendo lo descontado por concepto de garantía de pensión mínima, y exceptuando la a quo de tal devolución los conceptos de gastos de administración y seguros previsionales, al tener los mismos sustento legal, así como evidenciarse una buena administración en el lapso que el actor estuvo en dicho fondo, lo cual le generó unos rendimientos financieros, y al haber estado cubierto frente a los riesgos de invalidez y muerte durante su permanencia en el régimen de ahorro individual con solidaridad, ello como producto del pago realizado por el fondo a compañías aseguradoras de dicho régimen, quienes se constituyen en terceros de buena fe.

Inconforme con la decisión **Colpensiones** interpuso **recurso de apelación**, indicando que de considerarse procedente la declaratoria de ineficacia de afiliación, se debe ordenar al fondo privado el traslado del 100% de las cotizaciones realizadas, sin descuento alguno, esto es, que además de los aportes y rendimientos, se restituya el valor de los gastos de administración y seguros previsionales, al ser pacífica y reiterada la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en su Sala de Casación Laboral y la Constitucional, en disponer tal orden, incluso, con cargo al patrimonio de los fondos privados, ello, con fundamento en el artículo 48 Superior, y en aras de conservar el equilibrio financiero

del sistema, en tanto, las personas que retornan se encuentran próximas a pensionarse y es la entidad la que debe garantizar la financiación de las mesadas.

En lo desfavorable y no apelado por Colpensiones se conoce en grado jurisdiccional de consulta, en los términos del artículo 69 del C. P. T. y de la S.S.

De la oportunidad para presentar **alegaciones** hizo uso **Colpensiones**, ruega revocar la decisión, advirtiendo que los afiliados cuentan con el derecho de elegir libremente a que régimen quieren pertenecer, tal como lo indican los liberales b) y e) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993 modificado por la Ley 797 de 2003, hecho debidamente acreditado y también que el fondo suministró una información suficiente que le generó un grado de confiabilidad que la llevó a optar por pertenecer a dicho régimen, resaltándose como ventaja que su capital fuera heredable, la posibilidad de pensión anticipada y los rendimientos que percibía su ahorro, sin que se pueda afirmar que la AFP no proporcionó una suficiente, completa, clara, comprensible y oportuna información, pues ello desconoce que tal deber ha tenido varias etapas, y debe valorarse la actuación de acuerdo a la reglamentación vigente en cada una, recayendo también en cabeza del afiliado la responsabilidad de informarse adecuadamente de las condiciones del sistema general de pensiones al que quiere pertenecer.

Reitera que el demandante no puede ser trasladado nuevamente al RPMPD, por encontrarse dentro de la restricción legal de 10 años, lo que está acorde con la sentencia C 1024 de 2004, de la que transcribe aparte, y además la ineficacia resultaría inoponible a terceros de buena fe como Colpensiones, concepto que explica con citas jurisprudenciales.

En el evento de confirmarse procedente la ineficacia, pide modificar el numeral tercero, para ordenar a la AFP Porvenir S.A. trasladar a Colpensiones el 100% del aporte realizado por el demandante, teniendo en cuenta la sentencia SL81989 de 2008 (sic), que sirve de base a tal declaratoria y las SU 062-2010, SU130-2014 y las SL4989-2018 y SL1688-2019.

Demandante, pide se confirme la sentencia de instancia al no haber quedado acreditado que la AFP al momento de efectuar el traslado inicial de régimen pensional, no le brindó una asesoría clara, completa y eficiente, la cual le permitiera tomar una decisión consiente sobre las implicaciones que en su futuro pensional acarrearía dicho traslado, por lo cual, no puede hablarse que el traslado de régimen pensional se dio de manera libre y voluntaria, por tal, el mismo se torna ineficaz, tal y como lo indica el artículo 13 de la Ley 100 de 1993 en concordancia con el artículo 271 del mismo texto normativo y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral.

En orden a decidir, basten las siguientes,

Consideraciones:

De conformidad con lo expuesto, **el problema jurídico** en esta instancia se circunscribe a establecer, si hay lugar a la declaratoria de ineficacia de la afiliación del demandante al RAIS a través de la AFP Protección S.A., y como consecuencia de ello, a su inmersión automática en el RPMPD administrado por COLPENSIONES, con las correspondientes restituciones económicas por parte de la AFP, los conceptos que estas comprenden y si procede o no la actualización mediante el mecanismo de la indexación tal y como lo pretende la recurrente.

Pues bien. Reiterada ha sido la línea de la jurisprudencia **mayoritaria** de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia desde el año 2008, en torno al tema de la carencia de efectos jurídicos del traslado de régimen pensional cuando no está precedido de una suficiente, completa, clara, comprensible y oportuna información sobre las reales implicaciones de abandonar el régimen de prima media con prestación definida y sus posibles consecuencias futuras, existiendo unas reglas decantadas, entre ellas, que la movilidad entre regímenes debe estar precedida de la debida información y transparencia, **para el caso concreto, dado que el formulario de tránsito entre regímenes se suscribió el 29 de junio de 1994**, se estaba en el primer estadio de la regulación normativa, contenida entre otras en los arts. 13 literal b), 271 y 272 de la Ley 100 de 1993, art. 97, numeral 1° del Decreto 663 de 1993, disposiciones constitucionales relativas al derecho a la información, no menoscabo de derechos laborales y autonomía personal, y por tanto, el contenido mínimo estaba circunscrito a la **ilustración de las características, condiciones, acceso, efectos y riesgos de cada uno de los regímenes pensionales, lo que incluye dar a conocer la existencia de un régimen de transición y la eventual pérdida de beneficios pensionales**, y supone el análisis de la situación particular de cada afiliado ante el sistema, resultando extraño **que en el escrito de contestación, Protección S.A. siendo la administradora de pensiones del actor, diga que no le consta la afiliación y las semanas cotizadas al al RPM**, y sin embargo se contabilizan en las historias laborales adjuntas las semanas respaldadas con bono pensional **(379+125,86)**, las cuales sumadas a las 1.261,71 aportadas al fondo suman 1.766,57, en toda la vida laboral, datos que al parecer ni siquiera fueron consultados, además de resultar indispensables no solo para la afiliación, sino para determinar qué implicaciones le traía el tránsito entre regímenes, **conducta que evidencia que en realidad no se le hizo estudio particular y concreto de la situación del**

afiliado, sin que se haya incorporado ningún medio de convicción sobre **información completa, adecuada, amplia, correcta, clara, comprensible, veraz y suficiente**, obligación de ilustración que deben cumplir las AFP al momento del acto de traslado de régimen, estando la carga de la prueba en cabeza de las administradoras, sin que sea requisito para su cumplimiento que el afiliado goce del beneficio de la transición o tenga un derecho pensional consolidado, ni se infiera de los formularios suscritos, siendo la consecuencia de la inobservancia de tal deber, en cabeza de las administradoras, desde la entrada en vigencia del sistema pensional, artículo 97 Dto. 663 de 1993, **la ineficacia del acto de traslado de régimen en los términos de los artículos 13 literal b) y 271 de la Ley 100 de 1993**, norma que a la letra, para lo que interesa, indica: *la afiliación respectiva quedará sin efecto y podrá realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador*, **precepto a partir del cual se ha desarrollado la línea vigente en la jurisprudencia especializada, que esta Sala acoge como precedente vertical**, pues se carece de razones para argumentar en contrario, sin que la acción tendiente a ello sea vea afectada por el fenómeno extintivo de la prescripción, y siendo su consecuencia, para casos como el que se somete a estudio, que las cosas se retrotraigan al estado anterior, con la devolución de la totalidad de los aportes efectuados por el afiliado, con los rendimientos y deducciones, resultando innecesaria una extensa citación sobre el particular, y menos relacionar por radicación la gran cantidad de decisiones hasta la data actual proferidas por la Sala de Casación Laboral, bastando, para el caso, referir el contenido de la sentencia **SL843-2022**, radicación 85499, con fecha **16 de marzo de 2022**, en la que se explica en forma amplia lo dicho.

De acuerdo con ello, y por ser el precedente vigente en el órgano de cierre de esta especialidad, no tienen prosperidad las explicaciones de

la a quo tendientes a excluir de la orden de restitución los porcentajes destinados a **gastos de administración y seguros previsionales**, debiéndose tener en cuenta además lo dispuesto en el inciso 2º del artículo 7º del C. G. del P. en concordancia con la sentencia C 621-2015 y el pronunciamiento de la Sala de Casación Laboral en sentencia de tutela radicado 59370 del 06 de mayo de 2020, en que se exhorta a los jueces a acatar el precedente vertical, en aras de la garantía de los principios de seguridad jurídica e igualdad, pudiendo apartarse del mismo siempre y cuando se cumpla con una carga argumentativa transparente y suficiente,

... mediante un proceso expreso de contra-argumentación que explique las razones del disenso, bien por: (i) ausencia de identidad fáctica, que impide aplicar el precedente al caso concreto, (ii) cambios normativos, (iii) transformaciones sociales que obligan a dar una nueva mirada a determinada cuestión, o (iv) divergencias hermenéuticas fundadas en la prevalencia de mejores y más sólidos argumentos que permiten un desarrollo más amplio de los derechos, libertades y garantías constitucionales. Así, la posibilidad de separarse del precedente emanado de las corporaciones judiciales de cierre de las respectivas jurisdicciones supone, en primer término, un deber de reconocimiento del mismo y, adicionalmente, de explicitación de las razones de su desconsideración en el caso que se juzga (C-621-2015).

Es intrascendente que la parte actora haya percibido unos rendimientos financieros a partir de la gestión administrativa de los fondos de pensiones, en tanto COLPENSIONES no tiene por qué ver diezmada la cotización del afiliado cuando debe responder por una permanencia en el régimen, sin solución de continuidad; además, que precisamente por tratarse de descuentos que también existen en el régimen de prima media con prestación definida, no deben ser realizados por la AFP sino por COLPENSIONES, que es donde siempre ha permanecido, precisándose en sentencia SL 2877 de 2020, que *"la devolución de todos los recursos acumulados en la cuenta de ahorro individual en el RAIS debe ser plena y con efectos retroactivos, porque los mismos serán utilizados para la financiación de la pensión de vejez a que tiene derecho el demandante en el régimen de prima media con prestación definida..."*.

Desde este punto de vista, no se estaría generando enriquecimiento sin causa en favor de Colpensiones o del demandante, ya que se trata de la reivindicación de unas sumas que integran la cotización y que deben dirigirse a la administradora a la que ha pertenecido siempre sin solución de continuidad, razón por la que se **revoca parcialmente el numeral tercero de la parte resolutive de la sentencia** para ordenar a la **AFP Protección S.A., incluir dentro de las sumas a restituir a COLPENSIONES, el monto descontado por gastos de administración** (que en los términos del artículo 20 de la Ley 100 de 1993, **incluyen además de tal concepto, las primas de seguros previsionales y el porcentaje destinado a garantía de pensión mínima**), por ser esta una consecuencia correlativa y directa a la ineficacia de traslado.

Lo anterior implica revocar parcialmente el numeral quinto de la parte resolutive de la providencia, en cuanto declaró probadas las excepciones de no devolver cuotas de administración e inexistencia de la obligación de devolver prima del seguro previsional.

Cabe agregar que en atención a la modificación efectuada por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia (**ver entre otras, sentencias SL3202-2021, SL3706, SL3707, SL3708, SL3710, SL3349-2021, SL4803-2021, SL4609-2021, SL587-2022 y SL 1055-2022**), procedente resulta ordenar la **indexación de los rubros correspondientes a gastos de administración, primas de seguros previsionales de invalidez y sobrevivencia y el porcentaje destinado al fondo de garantía de pensión mínima,** por lo que se **adiciona la decisión revisada en tal sentido,** valores que deberá asumir la administradora Protección S.A con cargo a sus propios recursos.

Se complementa la decisión, **para indicar que la AFP** al momento de cumplir la orden impartida, deberá remitir a Colpensiones relación discriminada de los conceptos, con sus respectivos valores, junto con el detalle pormenorizado de los IBC, aportes y demás información relevante que los justifiquen.

No se está en este caso autorizando un traslado de régimen desatendiendo la restricción temporal del artículo 2º de la Ley 797 de 2003 que modificó el literal e) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, *después de un (1) año de la vigencia de la presente ley, el afiliado no podrá trasladarse de régimen cuando le faltaren diez (10) años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez*, sino imponiendo la sanción de ineficacia por no haberse dado una libertad informada en la elección de régimen pensional al momento del traslado, en los términos del literal b) de la misma norma, en concordancia con el artículo 271 del mismo estatuto, decisión con la que en manera alguna se atenta contra la sostenibilidad financiera del Régimen de Prima Media con Prestación Definida, pues con el traslado integro de recursos se garantiza la equivalencia de condiciones en aportes en el evento de haberse mantenido la vinculación, máxime cuando si bien es cierto esta es una regla introducida por el Acto Legislativo 01 de 2005 que modificó el 48 de la Constitución Política, debe tenerse en cuenta el Acto Legislativo 03 de 2011, artículo 1º, que modificó el artículo 334 superior relativo al régimen de Hacienda Pública, que en su **parágrafo** reza: ***al interpretar el presente artículo, bajo ninguna circunstancia, autoridad alguna de naturaleza administrativa, legislativa o judicial, podrá invocar la sostenibilidad fiscal para menoscabar los derechos fundamentales, restringir su alcance o negar su efectiva protección.***

Ante la prosperidad del recurso y por conocerse en grado jurisdiccional de **consulta para Colpensiones**, no hay lugar a imponer condena en costas en esta instancia.

En mérito de lo expuesto, la **Sala Cuarta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial Medellín**, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, **revoca parcialmente, adiciona y complementa la sentencia revisada en apelación y consulta**, proferida por el Juzgado Séptimo Laboral del Circuito, dentro del proceso promovido por **Arcángel de Jesús Corrales Tangarife**, en contra de la **AFP Protección S.A. y Colpensiones así:**

Revoca parcialmente el numeral tercero en el sentido de ordenar a la **AFP Protección S.A** devolver a COLPENSIONES **la totalidad de las cotizaciones obligatorias** recibidas con motivo de la afiliación del demandante al RAIS, con los rendimientos financieros, **incluidos los descuentos efectuados por gastos de administración, seguros previsionales y aporte a garantía de pensión mínima**, obligación que debe cumplirse dentro de los **30 días siguientes** a la ejecutoria de esta decisión. **Los últimos tres conceptos (gastos de administración, porcentaje aplicado a seguros previsionales y a garantía de pensión mínima) debidamente actualizados mediante el mecanismo de la indexación**, y con cargo a los recursos de la AFP.

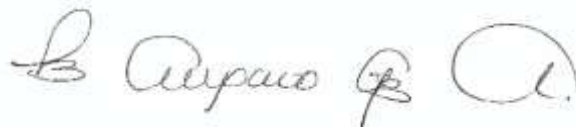
Complementa, para ordenarle a Protección S.A., que al momento de cumplir deberá allegar relación de los diferentes rubros discriminando sus respectivos valores, junto con el detalle pormenorizado de los ciclos, IBC, aportes y demás información relevante que los justifique

Revoca parcialmente el numeral quinto, en cuanto declaró probadas las excepciones de inexistencia de obligación de devolver las cuotas de administración y porcentajes aplicados a seguro previsional propuestas por Protección S.A., y en su lugar de desestiman estas. **En lo demás se confirma la providencia revisada.**

Ante la prosperidad del recurso y por conocerse en grado jurisdiccional de **consulta para Colpensiones**, no hay lugar a imponer condena en costas en esta instancia.

Lo resuelto se notifica a las partes por **EDICTO**, que se fijara por **secretaría por el término de un día**, en acatamiento a lo dispuesto por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en auto AL2550-2021.

Las magistradas (firmas escaneadas)



LUZ AMPARO GÓMEZ ARITIZABAL



MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ



CLAUDIA ANGÉLICA MARTÍNEZ CASTILLO